



## PRONUNCIAMIENTO

# DEFENDER LA REFORMA AGRARIA DE COLOMBIA Y LAS 4R FRENTE AL RETROCESO DE LA EXTREMA DERECHA

JULIO 2026

Nosotrxs, lxs abajo firmantes, entre los que se incluyen: miembros del Colectivo de Académicos-Activistas Agrarios del Sur (CASAS), Participantes en la Conferencia Académica Internacional por la Tierra, la Vida y la Sociedad celebrada en la Universidad de Cartagena, investigadores comprometidos, aliados y simpatizantes de todo el mundo - afirmamos la declaración colectiva emitida el 22 de febrero de 2026. La Declaración de Cartagena establece nuestros principios compartidos, basándose en el Manifiesto de Medellín (abril de 2025), la Declaración de Ciudad del Cabo (octubre de 2025) y la Declaración de Brasilia (diciembre de 2025). Hoy, nos reunimos de nuevo para expresar nuestra voz colectiva y hacer frente a una amenaza específica y urgente contra todo lo que hemos afirmado anteriormente.

Nuestra Declaración es inequívoca: la tierra, el agua, los espacios marinos y los bosques son vida. La tierra no puede reducirse a un insumo productivo, una mercancía, un activo financiero o un baldío a la espera de inversión. Es sustento, identidad, memoria, cultura, dignidad y vida. Cuando los movimientos sociales de campesinos, trabajadores rurales y Pueblos Indígenas exigen la democratización de la tierra, están exigiendo el derecho a la vida misma. Apoyamos a los movimientos sociales que promueven una agenda de democratización de la política de la tierra, redefinida en torno a las 4R inseparables: Reconocimiento, Redistribución, Restitución y Regulación. Estas no son pasos secuenciales u opcionales; se refuerzan mutuamente y deben perseguirse al unísono.

Entre 2022 y 2026, Colombia transformó las demandas históricas de Campesinos, Pueblos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes en avances concretos destinados a superar décadas de contrarreforma agraria, injusticia social, violencia sistemática y desplazamiento forzado en el campo. Bajo el "Gobierno del Cambio", las 4R inseparables - Restitución, Regulación, Reconocimiento y Redistribución - cobraron vida a través de la Política de Reforma Agraria, la implementación del Primer Punto del Acuerdo de Paz: la Reforma Rural Integral, y la transformación institucional del sector agropecuario, dando peso institucional a las luchas de los movimientos agrarios.



La **Restitución** comenzó a sanar las heridas del desplazamiento forzado al devolver **280.000 Ha** a Pueblos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes. La **Redistribución** avanzó mediante la adquisición de **779.000 Ha** asignadas a familias sin tierra para la producción de alimentos -devolviendo tierras productivas a quienes trabajan y producen alimentos- junto con la formalización de los derechos sobre la tierra de **2 millones de Ha** a familias campesinas; Estas medidas buscaban dismantelar la estructura desigual de la propiedad de la tierra. La **Regulación** reorientó la economía del país protegiendo los suelos de vocación agropecuaria para la soberanía alimentaria -abarcando **197.000 Ha** para Áreas de Especial Protección para la Producción de Alimentos- contra el uso insostenible del suelo, reasignando los activos productivos de los modelos extractivos hacia la agricultura campesina y familiar. El **Reconocimiento** se materializó a una escala sin precedentes, con el reconocimiento oficial de 25 territorialidades campesinas que abarcan **1,2 millones de Ha** (incluyendo la creación de 20 Zonas de Reserva Campesina), 203 Resguardos Indígenas que comprenden **1,3 millones de Ha** - junto con la concesión de gobernanza autónoma sobre **6,6 millones de Ha** de territorio amazónico a los Pueblos Indígenas; y el reconocimiento oficial de 102 Consejos Comunitarios para Comunidades Negras que salvaguardan **68.000 Ha** de tierras colectivas.

El efecto global de estas medidas ha sido la reducción más significativa de los niveles de pobreza rural en este siglo. Entre 2022 y 2025, 205.000 personas superaron la pobreza multidimensional, la pobreza monetaria cayó del 42,5% al 39,5%, y 311.000 personas salieron de la pobreza extrema en el mismo período. Por primera vez en una generación, el campo comenzó a sanar las cicatrices del despojo, el desplazamiento, el paramilitarismo, el extractivismo y la violencia sistémica. La experiencia colombiana demuestra que la Justicia Agraria no es utópica: es alcanzable a través de la voluntad política, la acción colectiva y la movilización social.

Fuimos testigxs de primera mano de esta transformación en la *II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria (ICARRD+20)* en Cartagena, celebrada junto a nuestra conferencia académica y el *Foro de Pueblos y Movimientos Sociales: Unidos por la Tierra, el Agua, los Territorios y la Dignidad*. Expresamos nuestra solidaridad inquebrantable con el "Gobierno del Cambio" colombiano y su liderazgo frente a las falsas acusaciones, los ataques políticos y la reversión de sus logros sociales. Repudiamos la tergiversación de las estadísticas de entrega de tierras y la obstrucción del proyecto de ley de Jurisdicción Agraria, un esfuerzo legislativo para proporcionar a las comunidades rurales los mecanismos institucionales para resolver los conflictos por la tierra de forma pacífica. Apoyamos a las víctimas de un patrón sistemático de amenazas, intimidación e incluso tortura contra familias campesinas que recibieron tierras a través de los programas de distribución del Estado—ataques que se han intensificado significativamente tras los recientes cambios electorales. Estos incidentes han sido documentados y denunciados ante la Fiscalía General de la Nación. Los esfuerzos del gobierno para redistribuir la tierra y promover la participación democrática en las zonas rurales han sido reconocidos por organizaciones multilaterales y observados por la comunidad global. Ya no estamos debatiendo políticas; estamos haciendo frente a



una campaña sistemática de intimidación. Las amenazas se intensifican contra los beneficiarios de la reforma agraria y contra los propios funcionarios gubernamentales encargados de implementar la ley y la política. Las mismas estructuras que históricamente ahogaron en sangre el campo colombiano se están reagrupando para dismantelar este legado. Vemos esto como un asalto premeditado contra el estado de derecho y la integridad física de quienes han esperado décadas por justicia.

## Nuestro Llamado Global a la Acción

Como académicxs comprometidxs con una investigación rigurosa, basada en la evidencia y coproducida, rechazamos las políticas tecnócratas, verticales y basadas en el mercado que durante décadas han resultado en pobreza, desigualdad, despojo, degradación de la tierra y malestar rural. Exigimos una transformación sistémica—no ajustes cosméticos. La comunidad internacional no puede permanecer como espectadora pasiva. Por lo tanto, exigimos las siguientes acciones:

1. **Salvaguardar los logros institucionales y legales de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y del Poder Judicial.** El nuevo gobierno de extrema derecha buscará paralizar, desfinanciar o dismantelar el aparato administrativo y judicial que hizo posible la redistribución de la tierra. Exigimos que el ejecutivo colombiano respete las sentencias vigentes, las resoluciones administrativas y las adjudicaciones de tierras emitidas por la ANT y las decisiones de la Corte Constitucional.
2. **Desplegar mecanismos de protección urgentes y en tiempo real para los líderes rurales y los funcionarios públicos.** Las amenazas no son abstractas—se dirigen a personas específicas, incluyendo beneficiarios de la reforma agraria, miembros de los Comités de Reforma Agraria, Gobernadores Indígenas, miembros de Consejos Comunitarios y los servidores públicos de la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras que han estado implementando la reforma. Hacemos un llamado al despliegue inmediato de misiones de observación internacional en territorios de alto conflicto donde las estructuras paramilitares se están reagrupando para intimidar y eliminar a los líderes rurales. Instamos a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Unión Europea a establecer un acompañamiento protector permanente y protocolos de respuesta rápida para aquellos que se encuentren bajo amenaza directa.
3. **Contrarrestar la criminalización y estigmatización de los defensores de la reforma agraria.** La narrativa de la extrema derecha ya está enmarcando a los líderes campesinos, indígenas y afrocolombianos como "simpatizantes de la guerrilla" u "obstáculos para el desarrollo". Esta estigmatización es una estrategia



deliberada para justificar la represión y legitimar la violencia paramilitar. Hacemos un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos—el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la CIDH y Amnistía Internacional—para que denuncien públicamente esta criminalización y presionen al Estado colombiano para que cese toda persecución judicial, política y física contra los líderes rurales que ejercen sus derechos constitucionales y territoriales. Solidarizarse significa refutar las campañas de desprestigio que buscan deslegitimar la lucha histórica por la tierra y a quienes arriesgan valientemente su seguridad en esa lucha.

4. **Condicionar la cooperación internacional, el comercio y la inversión al respeto de las conquistas constitucionales rurales y a la implementación del Acuerdo de Paz.**

Instamos a los bancos multilaterales, a las instituciones financieras internacionales y a las agencias de cooperación internacional a condicionar la ayuda futura, los acuerdos comerciales y las carteras de inversión al estricto cumplimiento de las disposiciones en materia agraria y rural del acuerdo de paz, las protecciones constitucionales para los territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes, y los compromisos asumidos en la ICARRD+20.

5. **Establecer un Observatorio Internacional Permanente para la Transición Agraria Colombiana.**

Más allá de misiones puntuales, exigimos la creación de un observatorio dedicado y con múltiples actores—compuesto por académicos, movimientos sociales, agencias de la ONU y organismos regionales de derechos humanos—para monitorear, documentar y reportar en tiempo real cada decreto ejecutivo, iniciativa legislativa, fallo judicial y decisión presupuestaria emitida por el nuevo gobierno de extrema derecha que amenace con revertir los logros territoriales y sociales. Este observatorio publicaría informes mensuales, emitiría alertas tempranas y coordinaría contramedidas legales y de base para defender cada hectárea de tierra y cada derecho ganado en los últimos cuatro años. La reforma del Observatorio Global de la Tierra de la FAO hacia una plataforma participativa y liderada por la comunidad debe comenzar con Colombia como caso piloto.

Defender la reforma agraria es defender el propio pluralismo de nuestras sociedades. El "Gobierno del Cambio" ha demostrado que una realidad rural diferente es posible. No permitiremos que la oligarquía reaccionaria, respaldada por potencias extranjeras, silencie esa posibilidad con amenazas y violencia. El mundo debe estar con el campo colombiano. Defenderemos su futuro contra aquellos que deseen ahogarlo en la sangre de su pasado.





Este pronunciamiento, organizado por la red de más de 400 miembros de CASAS, es apoyado por los siguientes firmantes, académicos, profesorxs e investigadorxs internacionales:

1. Ben Cousins — Emeritus Professor, Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies (PLAAS), University of the Western Cape (South Africa)
2. A. Haroon Akram-Lodhi — Professor Emeritus of Economics, Trent University (Canada)
3. Sérgio Sauer — Professor, Universidade de Brasília (UnB) (Brazil)
4. Ruth Hall — Professor, University of the Western Cape (South Africa)
5. Jun Borrás — Professor, International Institute of Social Studies (ISS) (Netherlands)
6. Marc Edelman — Professor, City University of New York (USA)
7. Jesse Ribot — Full Professor, School of International Service, American University (United States)
8. Sergio Pereira Leite — Full Professor, CPDA/UFRRJ (Brazil)
9. Leonilde Servolo de Medeiros — Professor, CPDA/UFRRJ (Brazil)
10. Jonathan Fox — Professor, School of International Service, American University (USA)
11. Ian Scoones — Professor, Institute of Development Studies, University of Sussex (UK)
12. Maria Cristina Vidotte — Professora Titular, UFG (Brazil)
13. Ramonildes Gomes — Professora, UFCG (Brazil)
14. Vanilde F. de Souza Esquerdo — Professora, Unicamp (Brazil)
15. Kasia Paprocki — Associate Professor, London School of Economics and Political Science (United Kingdom)
16. Débora Franco Lerner — Associated Professor, CPDA/UFRRJ (Brazil)
17. Estevan Coca — Assistant Professor, Universidade Federal de Alfenas (Brazil)
18. Belinda Ramírez — Assistant Professor, Binghamton University (United States)
19. Nils McCune — Lecturer, Institute for Agroecology, University of Vermont (USA)
20. Diana Maria Valencia Duarte — Lecturer and Researcher, Aberystwyth University (UK)
21. Andrea Sosa — Researcher / Investigadora, CONICET-UNSAM / UBA (Argentina)
22. Claudia Isabel Camacho Benavides — Coordinator, Investigación y Acción Biocultural, Anima Mundi, A.C. (Mexico)
23. Sinem Kavak — Researcher, Lund University (Denmark)
24. Zohanny Arboleda Mutis — Researcher, Independent (Colombia)
25. Alejandra Huaman — Researcher, Independent (Peru)
26. Jenni Carolina Perdomo Sánchez — Investigadora, Université de Montréal (Canada)
27. Julio Gutiérrez — Postdoctoral Fellow, University of California, Berkeley (United States)
28. Bruno Prado — PhD Candidate, CASAS (Brazil)



29. Itayosara Rojas — PhD Researcher, International Institute of Social Studies (Colombia)
30. Diego Alonso Palacios Llaque — Docente, (Peru)
31. Esteban Escalante Solano — Doctorante, PUCP (Peru)
32. Nicolas Rueda — PhD, CASAS (Colombia)
33. Julia Chang — Estudiante de posgrado, University of California, Berkeley (United States)
34. Sammy Andrea Sánchez Garavito — Estudiante doctoral, CASAS (Colombia/Canada)
35. Amod Shah — Visiting Fellow, International Institute of Social Studies (Netherlands)
36. Mamie Nuccia Albertine Ratsaramiafara — Enseignante, Université d'Antananarivo (Madagascar)
37. Carolina de Toledo Braga — Social Activist and Researcher, CASAS / MST / UnB (Brazil)
38. Kahayag Gabrielle Royo Fay — Agrarian Youth Organizer, The Samdhana Institute (Indonesia)
39. Claro Pasion — President, KATARUNGAN – Movement for Agrarian Reform and Social Justice (Philippines)
40. Megan Gross — Student, University of California, Santa Cruz (United States)
41. Feini Yin — Communications Director, North American Marine Alliance (USA)
42. Valerian Weinzeig — Member, RADD (USA)
43. Mauricio Dominguez — (No affiliation provided) (Colombia)